

MARZO 14 DE 1919

99.^a REUNION — 25.^a SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DEL SEÑOR D. ARTURO GOYENECHÉ

MINISTRO PRESENTE: DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: DR. D. Honorio J. Pueyrredón. DIPUTADOS PRESENTES: Agote Luis, Aldao Ricardo, Arámburi Juan B., Araya Rogelio, Arce José, Avellaneda Marco Aurelio, Avellaneda Nicolás A., Barceló Alberto, Barco Jerónimo del, Becú Carlos A., Beiró Francisco, Berrondo Valentín, Bonifacio Benjamín, Bravo Mario, Bunge Augusto, Caballero Ricardo, Cabrera Enrique, Caracocha Pedro, Carranza Wenceslao C., Carrasco Alejandro M., Cornet Pedro L., Costa Julio A., Dickmann Enrique, Fernández Jacinto, Ferrarotti Juan Luis, Ferreyra (hijo) Andrés, Gallo Vicente C., Garat Damián P., Gibert-Pedro F., González José Antonio, Goyeneche Arturo, Hernández Diógenes, Iriondo Néstor de, Jaramillo José M., Jiménez Beltrán Dámaso, Lagos Lauro, Lehmann Guillermo, Martínez José María, Melo Carlos F., Molina Víctor M., Montes José Antonio, Moreno J. Alejandro, Moreno (hijo) Rodolfo, Mosca Enrique M., Núñez Rafael, O'Farrell Juan, Padilla Eduardo, Padilla Ernesto E., Pagés Pedro L., Pérez Virasoro E., Pradere Carlos M., Quiroga Marcial V., Raffo de la Reta Julio C., Repetto Nicolás, Riú Francisco A., Rodríguez Alfredo, Rodríguez Carlos J., Sánchez Bustamante T., Sánchez Sorondo Matías G., Santamarina Antonio, Solanet Pedro, Tamborini José P., Usandivaras Agustín, Vaca Narvaia Jesús, Valle Delfor del, Vergara Valentín, Videla Horacio C., Villarroel Agustín J. DIPUTADOS AUSENTES: CON LICENCIA: Aquín Ireneo de, Bermúdez Manuel A., Cornejo Julio, Galíndez Francisco R., Justo Juan B., Massa Arturo H., Páez José E., Remonda Mingrand F., Rubilar Francisco, Sosa Leopoldo, Tomaso Antonio de. CON AVISO: Cordero Octavio, Daneri Luis M., Davel Ricardo J., Demaria (hijo) Mariano, Escobar Adrián C., Hernández Sabá Z., Isnardi Arturo, Leguizamón Arturo, Maidana Julián, Méndez Casariego Alberto, Mouesca Eduardo M., Puch Angel E., Solari Benjamín T., Vidart Roberto, Zalazar José María. SIN AVISO: Arancibia Rodríguez A., Aranda Macedonio, Aráoz Miguel A., Atencio Juan V., Breard Eugenio E., Cabrera Aníbal, Corvalán Santiago E., Gallegos Moyano Carlos, Garro Allende Juan E., Gatica Teófilo I., Martínez Enrique, Martínez Zuviria Gustavo, Oliva Moisés J., Oyhanarte Horacio B., Robín Castro Napoleón, Rodríguez Jorge Raúl, Vera Octaviano S.

SUMARIO:

- 1.—Apruébase el acta de la sesión anterior.
- 2.—Asuntos entrados.
- 3.—Indicación del señor diputado doctor José A. González relativa a la consideración pendiente de la ley de presupuesto para el corriente año.
- 4.—Pregunta del señor diputado doctor Enrique Dickmann referente a la inclusión en sesiones extraordinarias de los proyectos de ley sobre jornada de trabajo y cierre de las casas de comercio.
- 5.—Termina la consideración del despacho de la comisión de legislación (siendo aprobado) en el proyecto de ley relativo a la jubilación de empleados y obreros de empresas particulares que prestan servicios de carácter público.
- 6.—Respuestas del señor presidente de la honorable cámara a la pregunta registrada bajo el número 4 y a la que formula el señor diputado doctor Mario Bravo relativa a las informaciones solicitadas al poder ejecutivo respecto de los muertos, heridos y

presos, a consecuencia de los sucesos del 7 al 13 de enero en esta capital.

- 7.—Entrada de un despacho de la comisión de presupuesto en el proyecto de ley en revisión sobre aumento de sueldos a los agentes de policía, bomberos y empleados de correos y telégrafos. Moción rechazada del señor diputado doctor Andrés Ferreyra (hijo) a fin de considerar este despacho sobre tablas.
- 8.—Debate respecto al orden de consideración de los anexos pendientes del proyecto de ley de presupuesto para el corriente año.

- En Buenos Aires, a 14 de marzo de 1919, siendo las 4 y 35 p. m. ocupan sus asientos en el recinto los señores diputados en quórum legal.

1

ACTA

Mr. Presidente (Goyeneche). — queda abierta la sesión con 61 señores diputados en el recinto.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

Sr. Avellaneda (M. A.) — Hago indicación de que se suprima la lectura y se dé por aprobada.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Habiendo asentimiento, se da por aprobada.

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

Peticiones particulares

—La sociedad de defensa agraria de la estación Peyrano (Ferrocarril Central Argentino), solicita la sanción de una ley de moratoria. (*A la comisión especial de legislación agraria*).

3

CONSIDERACION DEL PRESUPUESTO

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a pasar a la orden del día.

Sr. González. — Pido la palabra para hacer una moción previa.

Como la consideración del despacho de la comisión de legislación será muy breve, según tengo entendido, hago indicación en el sentido de que se invite al señor ministro a que pertenezca el anexo que corresponde tratar, a fin de entrar sin pérdida de tiempo a la consideración de tan importante asunto.

Corresponde continuar con la consideración del anexo del interior, pero si el señor ministro del interior no estuviera presente en la capital, podría entrar a tratarse otro anexo e invitar se al ministro del ramo respectivo.

Sr. Presidente (Goyeneche). — La presidencia ha tenido, días pasados, la manifestación del señor ministro del interior de que mientras durara su ausencia rogaba a la cámara se ocupase de otros anexos, porque deseaba estar

presente para la discusión del que se refiere al departamento a su cargo.

Sr. del Barco. — Hemos visto por los diarios que se ha nombrado ministro interino de esa cartera al señor ministro de hacienda; de manera que puede venir éste, que está en funciones.

Sr. Rodríguez (A.). — Sobre todo, teniendo presente que el señor ministro de hacienda es necesario que esté aquí para tratar todos los anexos.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Perfectamente: se comunicará a los señores ministros del interior y de hacienda que se va a continuar con el despacho de la comisión de presupuesto.

4

PREGUNTA

Sr. Dickmann. — Pido la palabra para formular una pregunta a la presidencia.

Desearía saber si el poder ejecutivo ha contestado a la minuta de la honorable cámara en la que ésta solicitaba que incluyera entre los asuntos a tratarse en las sesiones extraordinarias el proyecto de ley de jornada de ocho horas y el de cierre de los negocios a las ocho de la noche.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Desearía que el señor diputado me aclarara la pregunta.

Sr. Dickmann. — Hace más o menos un mes la honorable cámara votó una minuta mía en que expresaba que vería con agrado que el poder ejecutivo incluyera en las sesiones extraordinarias el proyecto de ley de jornada de ocho horas y el de cierre de los negocios a las ocho de la noche. Preguntaba si el poder ejecutivo ha mandado un mensaje al respecto.

Sr. Presidente (Goyeneche). — La presidencia entiende que hace muchos días que el poder ejecutivo ha incluido esos asuntos entre los que deben tratarse en las sesiones extraordinarias.

Sr. Dickmann. — ¿El de jornada de ocho horas y el de cierre de los negocios a las ocho de la noche? Entiendo

que aún el poder ejecutivo no ha contestado.

Sr. Presidente (Goyeneche). — La presidencia cree que sí; pero para mayor seguridad va a ratificar el dato y en su oportunidad lo expresará a la honorable cámara.

5

JUBILACION DE EMPLEADOS Y OBREROS DE EMPRESAS PARTICULARES

Sr. Presidente (Goyeneche). — Continúa la consideración de la orden del día: despacho de la comisión de legislación en el proyecto de ley sobre jubilación de empleados y obreros de empresas que prestan servicio de carácter público.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Hubiera preferido no hacer uso de la palabra al discutirse en general este despacho, para que se apruebe en el más breve tiempo posible, dado lo retardados que estamos en la sanción del presupuesto. Pero es indispensable formular concisamente algunos conceptos fundamentales sobre las razones que nos mueven a los diputados socialistas a votar en favor de este proyecto de jubilaciones y pensiones de un grupo de obreros muy limitado, relativamente al inmenso conjunto de la clase obrera de la República Argentina. Es indispensable, para que se avalore el alcance social trascendente que damos a nuestro voto y a la sanción probable de la cámara.

Para nosotros, señor presidente, la legislación social es algo cuya importancia no puede ser discutida; pero se trata de medidas empíricas y de "transición", ante nuestro propósito fundamental de transformar el orden social capitalista sobre las bases científicas integrales, por la socialización de los medios de producción y de intercambio.

No puede, pues, ponerse en duda que nosotros queremos para la clase trabajadora de nuestro país el derecho al producto íntegro de su trabajo, en cuanto él puede atribuírsele a cada individuo y no a la sociedad, gracias a cuya

organización produce cada uno de sus miembros.

Queremos un orden social que podría explicarse en términos sencillos como significando un salario mínimo de un valor real doble del que podemos considerar hoy como salario mínimo indispensable y posible para los obreros: un salario mínimo de "doscientos pesos", desde que la renta y las usuras del capital vendrían a ser utilizadas socialmente, es decir, en beneficio de todos los productores, y no en beneficio de la minoría actualmente dueña de los medios de producción y de intercambio.

Desearnos, por tanto, llegar a un orden social — y cuanto antes — en que el trabajador, cuando llegue la hora de la vejez o de la invalidez, pueda mantener el mismo nivel de la vida que ha conseguido realizar con su esfuerzo durante los años de habilidad para el trabajo.

Y también queremos, señor presidente, decir la verdad al pueblo en todo momento: no caemos, o al menos tratamos de no hacerlo, en la adulación; no podemos por tanto engañar a nuestros compañeros de partido y a la clase trabajadora, pretendiendo hacerle creer que, en el actual régimen capitalista, puede un congreso — formado por representantes en su mayoría de partidos que no comparten nuestros propósitos — sancionar, sin perjuicio de la clase trabajadora en general, leyes particulares de jubilación de una parte de ella que le acuerden beneficios tan grandes que vendrían a pesar sobre su conjunto.

A causa de eso es que nosotros queremos, con un vivo anhelo — especialmente el diputado que habla, por el amor con que ha trabajado muchos años en ese sentido — el "seguro nacional" para todos los obreros de la república, y con los beneficios más amplios posibles dentro de nuestro actual orden social.

Queremos, no sólo las rentas de vejez y de invalidez, sino también los seguros de enfermedad y de maternidad y queremos también llegar cuanto antes al seguro de desocupación.

El seguro de enfermedad es de una importancia tan grande al menos como las rentas de vejez, porque en el término medio del conjunto de la población de un país, cada dos años y medio enfermamos cada uno y quedamos incapacitados para el trabajo durante tres semanas. Esto significa para aquellos que viven con la mano en la boca, con un salario apenas suficiente para el sustento diario, la amenaza de la miseria inmediata, que aparece en su hogar cada dos años durante tres semanas, por la pérdida de la capacidad de trabajo y por los gastos extraordinarios que ocasiona la enfermedad.

Es, pues, un inmenso desperdicio de riqueza, de bienestar y salud el que ocurre actualmente por falta de esa garantía del seguro de enfermedad para los trabajadores; desperdicio del que sufre todo el conjunto de la colectividad, no sólo por la producción perdida actualmente, sino por el estado de mala salud en que quedan centenares de miles de obreros mal atendidos y mal alimentados durante sus enfermedades.

Queremos también el seguro de maternidad, una dotación, un subsidio a la maternidad dolorosa y santa, que realiza la función primordial en la sociedad de conservar y aumentar la población y formar las nuevas generaciones.

Queremos el seguro de invalidez, es decir, una renta y asistencia médica para todo incapacitado permanentemente para el trabajo, por enfermedades crónicas.

Y tenemos un concepto real de lo que es la jubilación, el seguro de ancianidad. No podemos nosotros asimilar la jubilación honesta, que reclamamos para la clase trabajadora, con esas escandalosas gangas y prebendas que otorga la ley nacional de jubilaciones de empleados del estado, modificada por leyes sucesivas, en la forma que rige actualmente, o la ordenanza municipal de jubilaciones. Eso no es jubilación, sino jubileo para los que gozan de esas prebendas. Damos a la palabra "jubilación" el sentido que tiene en el idioma castellano, según el

dicecionario, esto es: "Eximir del servicio, por razón de ancianidad o imposibilidad física, a la persona que desempeña o ha desempeñado un cargo civil, señalándole pensión vitalicia en recompensa de los servicios prestados".

Dado este concepto, tenemos que agradecer con profundo agrado que el congreso de la nación argentina haya asimilado a funcionarios civiles a los obreros y empleados de servicios públicos, al otorgarles derecho a jubilación. Porque en esa forma ha afirmado el congreso argentino que estos trabajadores han comprometido la gratitud nacional; y ha afirmado al mismo tiempo que todo productor radicado en este país, al trabajar en su oficio, realiza un servicio civil que merece la gratitud nacional, y la pensión consiguiente cuando le llega la vejez o la invalidez. Ese principio, de inmensa importancia implica para el congreso argentino el compromiso de sancionar para todos los obreros de la república el seguro nacional, después de haber comenzado a sancionar las jubilaciones para una pequeña parte de ellos; aquéllos en que su implantación es más fácil, por la concentración de las empresas en que trabajan.

Pero no queremos — conviene insistir en ello — ni una jubilación demasada tardía, que no le permita al obrero gozar de un retiro bien ganado, ni una jubilación prematura, en la plenitud de la salud y del vigor.

No podemos admitir que se retiren de la sociedad fuerzas productivas que le hacen tanta falta. El retiro prematuro es anti-económico; es por lo tanto ruinoso para el pueblo si se hace general. Y es antisocial si el privilegio de una minoría, como es él hoy privilegio de nuestros burócratas jubilados. Extendido a una minoría obrera, convierte a esa minoría obrera en parasitaria del conjunto de la clase obrera de la república, cosa que nosotros no podríamos aprobar jamás.

Efectivamente, ¿quién alimenta a los que no producen? Es esa misma clase obrera. Por lo tanto, si todos dejáramos de trabajar desde los 45 años, como induce a nuestros trabajadores a

creerlo posible el indecente ejemplo de las leyes de jubilaciones que he mencionado, centenares de miles de hombres válidos pesarían sobre la clase trabajadora del país. Y entonces, además de la exacción del capital, de la usura del capital que ella debe alimentar con su trabajo, además de los niños, de los inválidos, de los ancianos, y de las madres absorbidas en las labores domésticas, ella debería costear la subsistencia de 220.000 varones válidos entre 50 y 59 años, que calculo sobre el total de 417.000 personas de ambos sexos comprendidas entre esas edades. Hoy ellos producen. Retirados, no producirían y habría que alimentarlos. Los entre 45 y 59 años son por lo menos otros tantos.

¿Cuál sería el resultado de eso? En el primer caso, si se retiraran del trabajo todos a los 50 años, se dejarían de producir 300 millones anuales en la república, suponiendo una producción de 1.500 pesos anuales por cada uno de esos trabajadores; y la clase trabajadora perdería con ello unos 150 millones en salarios, calculados a un promedio de 700 pesos anuales por cabeza. En el segundo caso la pérdida sería del doble.

Está luego la carga de la alimentación de esos retirados. Calculemos el mínimo extremo: un retiro, para cada uno, de sólo 33 pesos mensuales; ó 400 anuales. Eso representaría una carga suplementaria de 100 millones, además de los 300 perdidos por los retirados entre 50 y 59 años; y una de más de 200 millones en el segundo caso, porque saben muy bien los señores diputados que el hombre entre 45 y 50 años es más productivo que el entre 50 y 59. Pérdida total: de 400 millones en un caso y de más de 800 millones en el otro.

¿Sobre quién pesaría esa merma? Evidentemente que no sobre las utilidades del capital. En un estado capitalista, siempre consiguen las empresas capitalistas concesiones de parte de los resortes gobernantes, para hacer incidir sobre el salario todos los gravámenes que pesen sobre ellas bajo forma de seguro de sus obreros.

Por ejemplo, ello ocurrirá, según el despacho del senado, con la ley de jubilación de ferroviarios, en que las empresas han sido autorizadas a aumentar sus tarifas exactamente por el valor de la misma suma en que deberán contribuir para el seguro. Será así todo el conjunto del pueblo quien deberá costear la contribución de las empresas ferroviarias para las pensiones de sus obreros.

Quiere, pues, decir que el retiro prematuro de todos en edades hábiles significaría sacrificar el presente al porvenir, y hacer pesar sobre los hombros de los trabajadores asalariados, reducidos en número por ese retiro prematuro de una tan gran parte de ellos, un 30 por ciento más de cargas que las actuales. Ese retiro prematuro representa, pues, un empobrecimiento en el presente en holocausto del porvenir, y que la clase trabajadora carga sobre sus hombros, ya tan recargados hoy — además del peso del capitalismo que sustenta — el peso de una parte de sus propios hermanos. Y es evidente que si el retiro prematuro se limita a ser un privilegio de una parte de los obreros, convierte entonces a esa parte así favorecida, así privilegiada, en parasitaria, en ese sentido, de la clase obrera del país.

Ha hecho, pues, muy bien la comisión en fijar un límite de edad practicable, aunque generoso, a las jubilaciones de los empleados y obreros de servicios públicos de la capital. Si hubiera seguido a los que no querían límite de edad, como en el proyecto del ex diputado Veyga, en que, copiando el mal modelo municipal, no se fijaba dicho límite, habría incurrido en lo que podría muy bien llamarse cohecho electoral en compra de unos pocos miles de votos, a expensas de muchos millones de pesos ajenos, de tantos millones que pronto no hubiera habido con qué pagarlos.

Que el retiro no debe ser demasiado tardío; enteramente de acuerdo. Y ha de permitirme la honorable cámara que lea un párrafo de la exposición de motivos del proyecto socialista de código de seguro nacional, porque sintetiza

en mi entender, todo nuestro concepto sobre esta cuestión.

“El ideal no es el retiro a la edad más temprana posible, ideal negativo y hasta perjudicial, sino conseguir el mejoramiento de la vida: un mayor bienestar, y que todos seamos sanos y fuertes hasta la más avanzada edad. El remedio de la vejez prematura de tantos trabajadores es mejorar sus condiciones de existencia; aumentar los salarios, reducir a proporciones razonables las jornadas excesivas y sanear en todas formas el trabajo por medio de la lucha gremial y política. Así se consigue suprimir los inconvenientes que pueda tener el límite de edad (que he fijado en este proyecto para los retiros generales y de máxima importancia en sesenta años arriba, y de cincuenta y cinco años para los retiros voluntarios más reducidos) y se consigue evitar que la bendición de las pensiones amenaza volverse una maldición por su costo excesivo. Sólo por esa obra combinada puede realizarse la aspiración de que el trabajador que llega a la edad del retiro no se vea impedido, por la decrepitud prematura, de saborear el reposo bien ganado, y pueda contemplar el ocaso de su vida como el labrador robusto, que después de una fructuosa jornada, se sienta a la tarde en el umbral de su casa y aspira a pleno pulmón la brisa, bañando su mirada y su pensamiento en la luz que muere lentamente en el horizonte”.

Dado ese nuestro anhelo, señor presidente, de una organización de seguro nacional para todos, completa y sobre bases democráticas y científicas, sólo aceptamos el seguro parcial de un grupo reducido de trabajadores porque su sanción no tardará en imponer de hecho el seguro nacional para todos.

Las razones son las siguientes: Primero, porque implica un compromiso del gobierno y de esta cámara en ese sentido, desde que no puede admitirse una ley desigual para trabajadores que forman una misma clase y están en la misma situación. Segundo, porque hace penetrar la noción del seguro de Estado en las masas profundas. Y tercero,

porque el conjunto de los trabajadores no puede tardar en reclamar para sí, como derecho general, lo que vamos a sancionar hoy como privilegio de una pequeña parte de ellos.

Pero es necesario, señores diputados, hacer constar los peligros del seguro particular de rentas, sobre todo si él se hubiera inspirado en las bases groseramente empíricas, atieconómicas y antisociales de la caja nacional y de la municipal de jubilaciones, como era el proyecto del ex diputado Veyga.

El primer peligro sobre el cual deben meditar seriamente los trabajadores de la república, y en particular los que van a ser beneficiados por esta ley, consiste en que esta caja, limitada a las empresas de que ellos forman parte, tiende a estrechar sus ligaduras para con ellas. Porque si abandonan el trabajo en esas empresas antes de cierto tiempo, pierden las contribuciones que han aportado, y sobre todo, pierden — y así tiene que ser porque de lo contrario no habría seguro posible — las contribuciones más importantes que, en beneficio de ellos, han debido depositar las empresas en el fondo común. Se ven, pues, atados, movidos a continuar en la empresa, y tentados a ser más tolerantes con la insuficiencia del salario y con el exceso del trabajo, que cuando se trata de trabajadores que no están retenidos por ninguna suma ahorrada forzosamente y acreditada en una caja especial.

Ese peligro desaparece en absoluto con el seguro nacional, porque entonces todos los obreros en masa están asegurados en una sola caja, y quedan libres para buscar su empleador en cualquier momento, sin que por eso pierdan un solo centavo de las sumas que han llevado a la caja, ni de las que por ellos hayan debido abonar también sus sucesivos patrones.

Esto explica la pretensión de las compañías ferroviarias primero, y hoy de algunas de las compañías de estos servicios municipales, de que constituíamos una caja especial, mejor dicho, una cajita de bolsillo para cada una de ellas. En esa forma, sería todavía

más reducido el radio de acción de cada uno de sus obreros, pues bastaría que salieran de esa cajita para que perdieran todos sus derechos. Podría, pues, tenerlos encadenados aún mejor.

El segundo peligro consiste en que, si los beneficios son muy altos como ocurre—y lo diré aunque ello pueda no ser simpático a algunos obreros, inducidos en error por propagandas aduladoras— como ocurre con esta ley que vamos a sancionar hoy y con la de jubilaciones ferroviarias, que son las más generosas del mundo en esta materia, y más que cualquiera ley de jubilación de empleados civiles — excepto tal vez la de Francia — si esos beneficios son muy altos, es indispensable exigir de los trabajadores una contribución tan elevada que tiende a hacer imposibles los seguros de enfermedad y de desocupación, que no son menos importantes que las rentas, y que son relativamente más costosos.

Desgraciadamente, he tenido que apoyar a la comisión en su propósito de imponer una deducción del cinco por ciento en todos los salarios, aun en los más pequeños, porque de otra manera se hubiera debido exigir de las empresas una contribución tan alta que la mayoría del congreso no la hubiera aceptado, y no habríamos conseguido hacer sancionar la ley. Pero también la apoyo en la esperanza de que esos obreros, que están organizados, o que harán bien en organizarse si no lo están, han de reclamar mañana una mejora en sus salarios, que los compense de esta exacción.

Pero calculando el seguro social sobre la medida del estricto mínimo indispensable, que es el criterio que debe tener el legislador para poder extenderlo sin mayores dificultades a la totalidad de la masa laboriosa de la república, puede implantarse un sistema completo exigiendo contribuciones mucho más moderadas a los obreros. Lo demuestra el proyecto que he presentado a fines del año 1917. Según dicho proyecto, no se exige contribución alguna a los asegurados cuyos salarios sean inferiores a dos pesos, y hasta este

límite; el monto de la contribución exigida para los salarios de dos a tres pesos — promedio groseramente aritmético de 2 y medio — representa sólo el 1,7 por ciento de los salarios; y en la categoría más alta de éstos, arriba de cinco pesos — es decir, promedio de 6 pesos — en la que es más elevada la contribución del asegurado, de dos tercios de la total, su contribución no llega a representar el tres por ciento. Sin embargo, mi proyecto garantiza la mitad del salario en caso de enfermedad y una pensión de 30 a 50 pesos mensuales por invalidez, garantiza asistencia médica y medicamentos gratuitos, una importante dotación de maternidad, la más importante de las establecidas por leyes análogas de otros países, y una pensión de ancianidad de 30 a 50 pesos mensuales.

Pero si sobre el cartabón de pensiones tan elevadas del 95 por ciento de los últimos sueldos, van a instituirse mañana un seguro de enfermedad no menos abundante para los obreros jubilados por esas nuestras primeras leyes de pensiones, se encontrará que, o hay que exigirlo todo de las empresas — cosa que yo por mi parte suscribiría con agrado — o hay que exigir a los obreros y empleados una contribución suplementaria no menor del tres por ciento de sus salarios, que naturalmente no estarían muy dispuestos a aceptar, sobre todo cuando perciben salarios inferiores a 100 pesos. Debe tenerse en cuenta que en los pequeños salarios, estas deducciones representan un sacrificio considerable y doloroso.

Dificulta también un sistema de beneficios tan elevados la implantación del seguro nacional con contribución del estado. Si, por ejemplo, para asegurar a sólo cien mil obreros, para garantizarles pensiones equivalentes a su último sueldo, o poco menos, sea cual fuere su monto y hasta mil pesos, se necesita del Estado — como es muy posible que ocurra con la ley de jubilaciones ferroviarias — hasta veinte millones de pesos anuales, estará un fisco capitalista, un fisco con bases impositivas tan falsas como el nuestro, menos

dispuesto a acordar al conjunto de los obreros la más humilde renta de vejez para que no se mueran de hambre. Quedaría así favorecido un gremio a expensas de la totalidad de la clase trabajadora. De esa manera, se habría atado el gobierno las manos por favoritismo — por un favoritismo que no quiero calificar de electoral, aunque podría serlo — se habría atado las manos, digo, impedido, por la consabida “falta de recursos”, de asegurar el derecho más elemental de vida al conjunto de todos los trabajadores de la república.

Todos los inconvenientes económicos, sociales y morales que he hecho notar, se encontraban en grado máximo en el “plausible” proyecto, como con generosidad benévola ha dicho el señor miembro informante de la comisión, del ex diputado de Veyga.

Sr. Avellaneda (N. A.). — Por su oportunidad.

Sr. Bunge. — Conviene hacerlo notar, para que quede constancia de que el despacho que se discute hoy, — en el cual la comisión ha aceptado la sustitución de la tercera parte de sus artículos por 17 artículos que le propusiera, algunos de ellos poniéndonos de acuerdo con el señor diputado Beiró — ese despacho sólo tiene del “proyecto de Veyga” uno que otro enojoso rastro, porque ha ido desprendiendo gradualmente, como una desagradable costra, todo lo que de él conservaba en su primitiva forma.

Ante todo, la comisión, con buen criterio, exige una contribución fija de las empresas, concienzudamente calculada, mientras que el primitivo proyecto no exigía ninguna y pretendía que el pueblo entero de la capital gastara varios millones más en sus tranvías, en gas, en teléfonos, en luz eléctrica, para que así las empresas gozaran del privilegio de tener a sus obreros jubilados, pero sin contribuir a ello con un solo centavo.

El proyecto de la comisión, en su forma actual, ha fijado límites equitativos de edad, y ha limitado y coordinado debidamente los beneficios, en la forma que han podido comprobar los señores diputados, haciendo del sistema

una verdadera “jubilación”, en el sentido que le da a la palabra nuestro idioma: un retiro no sólo de vejez sino también de invalidez, y un subsidio para las viudas y huérfanos. Pero en cambio, ha reducido las tasas de jubilación de los sueldos superiores a cien pesos, tanto más cuanto más elevado es el sueldo, adoptando la escala del proyecto de jubilaciones ferroviarias.

A pesar de que estoy deseoso de terminar, debo hacer notar la importancia que tiene esta reducción de la escala, porque si no se mantiene en la actual ley, o si en el senado ella fuera subvertida, desaparecería toda la base económica de la caja.

Supongamos el caso de un trabajador que comienza ganando cien pesos mensuales y que merece cada cinco años un aumento de sueldo de cincuenta pesos mensuales. Terminará su carrera con un sueldo de trescientos cincuenta pesos mensuales, que es el que habrá percibido durante los últimos cinco años.

Como ven los señores diputados, pongo intencionadamente un ejemplo muy moderado. Si se jubila con el 95 por ciento de su último sueldo, despojará a la caja, es decir, a la inmensa mayoría de sus compañeros, que no han sido ascendidos o que, a lo más, consiguen ascensos insignificantes, de una gran parte de sus depósitos. Porque como ha contribuido en estricta proporción al monto de su sueldo, en realidad el sueldo que ha percibido, término medio, durante los treinta años, es sólo de 260 pesos, y no ha asegurado una renta sino del 95 por ciento de esta suma, en el supuesto de que esté matemáticamente bien calculado el sistema de seguros.

Quiere, pues, decir que la caja sólo ha recibido por este empleado un capital capaz de alimentar una renta vitalicia de 247 pesos mensuales, y en cambio, él va a percibir 332.50. Son, pues, más de mil pesos al año que sustrae de la caja de los futuros jubilados, de sus compañeros de trabajo.

Es indispensable decir estas verdades, que estoy seguro los interesados

sabrán apreciar, pues ningún trabajador consciente aceptará ser favorecido a expensas de sus compañeros de clase más mal pagos que él. Y es lo que ocurriría si no se compensara el derecho a la jubilación sobre la base del sueldo de los últimos cinco años, que establece el proyecto, con esta tasa decreciente para los sueldos más altos.

Debe, pues, sancionarse sin modificación esa escala, porque es la llave de bóveda de todo el edificio, que se derrumbará si se la falsea para favorecer a los sueldos superiores a cien pesos.

Gracias a esta escala, las bases económicas del proyecto serían suficientes, si todos los beneficiarios contribuyeran efectivamente durante el mínimum de años que prescribe la ley en sus artículos pertinentes, con tal de que se modifique un artículo — para el cual me reservo en la discusión en particular el derecho de objetarlo: — el que trata de los retiros voluntarios, que hace en mi entender del todo imposible la estabilidad de la caja más allá de diez años.

Las contribuciones cubren las cargas, según cálculos actuariales de que dispongo, cálculos actuariales sobre los cuales me permito llamar la atención de la honorable cámara. Aunque no los expondré por lo abstractos, puedo decir con verdad que ellos significan el primer trabajo realmente científico que se ha hecho en nuestro país en materia de bases matemáticas del seguro social.

Nuestro congreso no ha dispuesto hasta ahora de un trabajo técnico digno de tal nombre, porque para el proyecto de jubilación de ferroviarios se nombró una comisión técnica que presentó un voluminoso informe que tiene muchos números, pero absolutamente ningún dato de valor, y que prescinde en absoluto de las reglas más elementales de la matemática actuarial. La comisión de la ley de jubilación de ferroviarios solicitó a su vez un informe de una comisión de profesores de la facultad de ciencias económicas. Las conclusiones de ese informe se inspiran en publicaciones actuariales sin

duda bien hechas; pero son conclusiones dogmáticas, que carecen, por tanto, de valor científico, porque no dicen en qué tabla de mortalidad se han basado, lo que es capital; no dicen tampoco sobre qué tabla se ha calculado el riesgo de invalidez, ni se mencionan las fuentes de información. Es, por tanto, simplemente un dictamen *ex cathedra* que carece de valor científico.

El ministro de obras públicas, en la actual discusión de la ley de jubilación de ferroviarios, tampoco ha aportado el menor dato positivo, a pesar de que debe haber en las oficinas nacionales algunos actuarios.

El trabajo en que me he basado en este punto pertenece en sus bases, fundamentales al doctor en ciencias económicas Argentino Acerboni, que ha publicado una concienzuda tesis sobre la cuestión. Ha confeccionado para ella una tabla de mortalidad del conjunto de la población de Buenos Aires, y calculando, sobre su base, el costo de un seguro de rentas con tasas de interés variable, del 4 al 6 por ciento. Las probabilidades de invalidez han sido tomadas de una tabla de Zimmermann, que entiendo corresponde a las de los ferroviarios alemanes. Son algo bajas, por lo que yo he corregido las primas calculadas por dicho actuario, sobre las probabilidades de invalidez de la totalidad de los asegurados en Alemania, de las cuales resulta un riesgo dos veces y pico mayor.

Sobre estas bases, el señor Porto, del seminario de la Facultad de ciencias económicas, y un joven Carbone, han hecho un interesante trabajo siguiendo mis indicaciones, trabajo del cual voy a permitirme intercalar una planilla en esta parte de mi discurso, para que pueda cualquiera de los señores diputados verificar en ella las diferencias del costo de una renta de ancianidad, según la edad del retiro y según el número de años de acumulación de las cotizaciones. Podrán así ver que de cinco en cinco años se efectúa un recargo creciente, y que el costo de los retiros de 50 y 45 años, con menos de 30 de contribución, es formidable: es absolutamente prohibitivo.

Costo de una pensión vitalicia de un peso según tablas de mortalidad y de conmutación, 5 o/o, de A. Acerboni.

Edad al pagar la primera cuota	Primas continuas, según que se inicie la renta a				
	45 años	50 años	55 años	60 años	65 años
20 años	0,20332	0,12057	0,06908	0,03729	0,01846
25 "	0,30229	0,17346	0,09743	0,05195	0,02554
30 "	0,47757	0,25915	0,14130	0,07385	0,03592
35 "	—	0,41182	0,21240	0,10799	0,05168
40 "	—	—	0,34157	0,16503	0,07691
45 "	—	—	—	0,27030	0,12018

He hecho personalmente los cálculos del costo para la edad de 45 años que figura en esta planilla, directamente de las tablas de conmutación del doctor Acerboni.

Con la contribución en total del 14 por ciento de nuestro proyecto, pienso, de acuerdo con esta planilla y otros cálculos, que se cubren medianamente, hasta de aquí veinte años, todos los riesgos que el articulado impone a la caja.

Límite tanto el tiempo de seguridad porque hay dos grandes incógnitas. Ante todo, las pensiones que deben acordarse desde los tres años de vigencia de la ley, cuyos beneficiarios no habrán contribuido nada, o habrán contribuido sólo durante tres o pocos años más. Luego, es una incógnita relativa, aunque su valor se puede apreciar con grosera aproximación, la carga de las pensiones de las viudas y huérfanos. Y hay además el beneficio de los retiros voluntarios tal como está en el proyecto, que debe en mi entender ser modificado sustancialmente para evitar la ruina segura de la caja, si se lo sanciona en la forma que tiene en el despacho.

Eliminado este peligro, yo creo que podemos emprender el experimento, a pesar de la falla económica de esas pensiones que empezarán a regir sin haberse contribuido, con la confianza de que la caja podrá sostenerse, haciéndose en caso necesario reformas de detalle. Creo que podrá sostenerse gracias a los recursos accesorios que tiene. Ellos están representados por los que se jubilarán más adelante con más de treinta años de contribuciones efectivas, y por los que salen del empleo antes de los

diez años que dan derecho a devolución de sus aportes.

Se ha dicho — y yo he recibido el mismo pequeño prospecto de reclame electoral a que se aludió — que es este un proyecto electoral. Si tal ha sido, me parece que sus autores, así como los redactores del prospecto mencionado, se van a chasquear. He verificado en el censo el número de personas con derecho de voto que van a ser beneficiadas con esta ley y son, relativamente al conjunto, muy pocas. Por ejemplo, entre los tranviarios, entre motormen, empleados de tranvías y guardas, el censo da 1994 argentinos y más de 9.000 inmigrantes. Entre los obreros de las usinas de luz, el censo de las industrias da 1148 nativos y más de 5.000 inmigrantes; si la memoria no me engaña en el detalle de algún número.

No puedo, pues, creer que se haya tratado de un cálculo electoral. Y, por mi parte, yo no lo he hecho. He de votar con agrado la ley, después de haber colaborado con amor en ella, porque implica continuar más resueltamente en la vía emprendida hacia el seguro nacional con la ley de jubilación de los ferroviarios.

Pero yo no desapruero, señor presidente, en modo alguno las iniciativas "electorales". Nosotros dependemos de un electorado; tenemos la obligación de cumplir con el mandato que él nos ha dado; tenemos, además, la obligación de interpretar y servir sus anhelos.

Invito, pues, al congreso a hacer cuanto antes una verdadera y gran sanción electoral, que es al mismo tiempo de verdadera "alta política"... ahora que se habla tanto de "alta política" haciéndola muy pequeña. Esta sanción es la del seguro nacional; para que llegue con ella el día en que toda la extensión de la república, entre sus dos millones y medio de trabajadores, de las ciudades de sus contornos y de las partes más pobladas de la campaña, no haya uno solo que carezca de garantía para los casos de enfermedad y de invalidez, para la maternidad de sus esposas y para su vejez; para que a todo nuestro vasto territorio se ex-

tienda esa gran organización, en la cual toman parte todos los trabajadores, nativos e inmigrados, y que por lo tanto los constituye de hecho en "nación", les da una verdadera patria, que puedan sentir todos los días y que han de gobernar ellos mismos. Habremos realizado entonces una verdadera revolución en el bienestar general y en las costumbres; y habituado a nuestro pueblo, hoy amorfo todavía, masa heterogénea, a la solidaridad de todos los días, desarrollando en él, por medio de esa vasta cooperación previsora, una conciencia social superior.

He dicho. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Sr. Avellaneda (N. A.) — Pido la palabra.

Deseo hacer una aclaración que creo que se impone. Es necesario dejar bien sentado que el despacho de la comisión de legislación sobre este simpático y trascendental asunto fué presentado a la cámara el 30 de septiembre del año pasado, y que hace año y medio, ya, que la comisión de legislación viene ocupándose de él; de manera que no es en modo alguno el momento político de ahora el que ha traído el asunto al debate.

Nada más.

Sr. Araya. — Pido la palabra.

Las dos exposiciones que han tenido lugar muestran el espíritu de equanimidad y justicia que informa el despacho de la comisión. El señor diputado Avellaneda, conservador, cuando fundaba el despacho en nombre de toda la comisión nos hablaba con un espíritu de liberalismo que aplaudo; y el señor diputado Bunge, que ha hecho una exposición minuciosa y ha tratado todos los puntos de esta cuestión con un acierto encomiable, nos hablaba con un espíritu conservador que también aplaudo. Es que dentro de la comisión se ha trabajado con el propósito de proyectar no una ley que tuviera influencia sobre el electorado de la república, sino que, con la práctica adquirida por leyes anteriores que hemos preparado y que más tarde sancionó esta cámara, hemos deseado que

esta ley de jubilaciones y pensiones fuese, a la vez que una ley que beneficiase a la clase obrera, una ley basada sobre principios matemáticos que aseguraran a la caja a crearse toda la eficiencia necesaria para que preste los beneficios a que está destinada.

Este proyecto ha pasado por una serie de modificaciones: de él queda la línea general, amorosamente afirmada por una serie de modificaciones propuestas por los diputados de todos los sectores de la cámara. No era bastante para nosotros dictar una ley apresurada, como fué la primera ley que se dictó respecto de las jubilaciones y pensiones de los ferroviarios, que necesitó más tarde ser modificada sujetándola a largo estudio que retardó su vigencia. Era necesario crear primero el capital de la caja y la manera de resguardar ese capital para que las pensiones pudieran realmente abonarse. Demás está decir que hemos sido objeto de una cantidad de solicitudes para que redujéramos el número de años de edad, o el número de años de servicios, o para que aumentáramos la tasa de las pensiones y jubilaciones; pero nos hemos resistido a todas estas solicitudes que a aceptarlas hubieran minuido la base financiera de la caja. Por eso es de elogiar la independencia de criterio y la honradez intelectual que ha puesto en su discurso el señor diputado Bunge, y yo me complazco en manifestar que todas las modificaciones que el señor diputado Bunge presentó en el seno de la comisión, han tenido mi voto favorable.

Es una rara concordancia la que se ha producido entre todos los diputados de esta cámara, y es ella un rasgo que denota que ésta es realmente un ser colectivo que tiene conciencia propia y que en cada ocasión importante sabe colocarse a la altura de sus deberes. Es un elogio que creo merecemos y que no debemos ocultarlo por falsa modestia.

De todo esto, resulta, señor presidente, que este despacho, informado de modo honesto por diputados de to-

dos los sectores, podría ser ciertamente votado a libro cerrado. Tal es el espíritu de justicia y de euanimidad que preside sus disposiciones.

Los diputados radicales, que teníamos a la vista un proyecto presentado por un miembro de nuestra colectividad política, no hemos hecho cuestión de partido, no hemos puesto amor propio alguno al aceptar modificaciones al proyecto que pudiesen traslucir al público la intervención de otras inteligencias ajenas a nuestro grupo político. Para nosotros, eso no significaba nada; los diputados, cualquiera que sea el partido a que pertenezcan en el ejercicio de la función pública, desempeñan funciones absolutamente independientes y superiores a ellos mismos, y por consiguiente están en la obligación de responder a los intereses y necesidades colectivas por encima de los intereses y necesidades partidarias, que son siempre inferiores al bien público.

Necesitaba, señor presidente, decir estas palabras. No quiero entrar en el debate que tan brillantemente ha sido planteado por el miembro informante de la comisión y al que ha puesto un coronamiento muy digno el señor diputado Bunge, con un acopio de datos científicos que lo hacen aparecer como una verdadera conferencia sobre la materia, como muy bien puede darla un hombre que tiene, como el señor diputado Bunge, tan profundo conocimiento sobre la materia del seguro nacional.

Sabemos bien que no es una obra completa la que realizamos. En realidad, debiéramos instituir como el señor diputado lo decía, el seguro nacional; porque estos derechos que acordamos a ciertos gremios deben ser patrimonio de toda la clase trabajadora. Pero no es posible, dentro de los limitados recursos económicos y financieros en que nos desenvolvemos, hacer efectivo ese seguro de inmediato. Por eso lo acordamos a los gremios que tienen un número suficiente de empleados, capaz de asegurar la formación de una caja que responda real-

mente al pago de las pensiones y jubilaciones que por la ley se establecen.

Poco a poco se irán dictando leyes semejantes para otros gremios, porque lo que más deseamos hacer con esta clase de leyes es precisamente despertar en la clase trabajadora de toda la república el sentimiento de su derecho a exigir, como soldados del trabajo, el mismo respeto y las mismas consideraciones que los soldados en los campos de batalla, o que los empleados públicos, que no prestando muchas veces ningún servicio de orden público, recogen por virtud de las leyes actuales, jubilaciones y pensiones que los protegen.

Estos propósitos son ampliamente cumplidos por el proyecto que se presenta a la consideración de la cámara. He de repetir que he querido simplemente expresar las razones que tuve para suscribir complacido este despacho y por las cuales me permití dirigirme a mis honorables colegas solicitándoles su mayor benevolencia en el deseo de que se eviten inútiles discusiones que puedan retardar la conversión de este despacho en ley, porque en realidad responde a una verdadera necesidad pública, y cumplimos con su sanción un deber de estricta justicia.

He dicho.

Sr. Beiró. — Pido la palabra.

No hubiera dicho una palabra, señor presidente, si sólo hubiéramos escuchado el discurso del señor miembro informante de la comisión, doctor Avellaneda; pero la casi descalificación que el señor diputado Bunge ha querido hacer de la intención con que el ex diputado Veyga presentó este proyecto y en consecuencia, del móvil por el cual yo he gestionado ante la cámara su pronto despacho, me obliga a pronunciar algunas palabras.

Sr. Bunge. — ¿Me permite el señor diputado?

He negado la oportunidad.

Sr. Beiró. — Ha vertido también otro concepto que me interesa también aclarar.

El ex diputado Veyga presentó este proyecto cumpliendo con un sentimiento que anima a la unión cívica radical, que es el de solidaridad social.

Rechazo categóricamente, que se clasifique como partido de clase a la unión cívica radical, porque, como lo he dicho repetidas veces en esta cámara, practicamos y sostenemos el concepto de la solidaridad humana, como un alto y nuevo ideal de civilización americana, sin que esto importe desconocer los conflictos del capital y del trabajo.

Animados de ese alto sentimiento, hemos presentado este proyecto, porque lo hemos creído bueno, porque con él se satisfacía un anhelo que era público y manifiesto en el gremio de tranviarios.

En 1912 me acerqué a algunos diputados radicales — al doctor Araya, que por fortuna está presente y puede ratificar este aserto; al señor Cantilo y no recuerdo si a algún otro — y les sometí la idea de presentar de inmediato los proyectos de seguro nacional, de jubilación de ferroviarios, de los empleados de todos aquellos servicios que se hicieran en mérito de concesiones nacionales, provinciales o municipales.

Y tan no obedece este proyecto a circunstancias momentáneas, que ya en las sesiones ordinarias nos ocupamos de este proyecto. En agosto, según creo, yo pedí su pronto despacho; y durante el receso, en silencio, me presenté al poder ejecutivo y le solicité que lo incorporara a las sesiones extraordinarias. Luego he pedido que se señalara día para tratarlo; y con un pensamiento ajeno a toda publicidad, fuí a la comisión y dije: yo tengo algunas modificaciones; ¿quieren ustedes, estudiarlas serenamente y tomarlas en cuenta si las creen buenas?

No ha habido, entonces, un propósito de publicidad electoral sino el pensamiento de cumplir con un acto que reputamos de solidaridad social. Todos los radicales de esta cámara teníamos el deber de propiciar una iniciativa que llevara de inmediato un beneficio a un grupo tan grande de trabajadores.

Es verdad que es preferible el seguro nacional.

El proyecto del señor diputado Bunge sobre seguro nacional tuvo la virtud de matar hace un año y medio mi proyecto de ordenanza sobre ayuda mutua entre los empleados municipales.

Pero hay dos maneras de legislar. Aquella por la que se busca la perfección y aquella por la que se persigue lo práctico, lo que se puede hacer. El seguro nacional requiere una financiación tan difícil y una organización del trabajo y de los salarios tal, que hoy no podemos considerarlo sino como una aspiración teórica.

Cuando presentemos, con mi distinguido colega, doctor Carlos J. Rodríguez, — hoy mismo podemos hacerlo, porque lo tenemos redactado y lo haremos en breve — el proyecto de salario mínimo en toda la república, se sancione y tengamos todos aquellos factores necesarios para establecer el seguro nacional, habrá llegado el momento de legislarlo sobre bases serias.

Entretanto, nos encontramos nosotros con un gremio cuya jubilación podemos financiar perfectamente, y nos preguntamos: si no podemos hacer todo ¿por qué no hacemos de inmediato lo que podemos?

Sr. Bunge. — De acuerdo.

Sr. Beiró. — Ahí está la diferencia de criterio con el señor diputado Bunge, que ya me ha separado de él cuando discutimos la cuestión de la ley sobre accidentes del trabajo.

Voy a terminar en seguida.

He afirmado estos tres conceptos: primero, que la unión cívica radical, dentro de sus conceptos morales, estaba obligada a presentar y sostener con todo ahínco y calor un proyecto de esta naturaleza: Segundo, que no es un proyecto electoral que haya surgido en este momento, sino que hace años que venimos gestionando constantemente su sanción. Y tercero, que si bien es preferible teóricamente el seguro nacional, tenemos el deber de hacer lo que es hacedero, y no, por abarcar demasiado, dejar de hacer lo que es urgente y práctico. Nada más.

Sr. Pagés. — Pido la palabra.

Yo siento la necesidad de decir dos

palabras para fundar el voto que voy a dar en favor del despacho de la comisión, que lo daría a libro cerrado, como lo dijo muy bien el señor diputado Araya, porque estas cuestiones deben estudiarse en comisión, calcularse allí sus bases financieras y salir de su seno ya formulados los proyectos para que cuando se sometan a la cámara no sean motivo de mayor discusión.

Pero como se dice generalmente que la cámara ha estado en retardo en la cuestión de sanciones de leyes sociales y obreras, yo siento la necesidad, señor presidente, de recordar que esta cámara, en el período del año 1917,— que es el período en que más leyes de carácter social se han sancionado y no bajo el apremio de las circunstancias actuales, — sancionó primero la ley del hogar, luego la ley de jubilación de ferroviarios, sin que vinieran los gremios respectivos a golpear las puertas del congreso, a pedir las leyes. Fue porque en la cámara había un espíritu de justicia y de humanidad necesario para dar al país todas esas leyes. Se sancionó en la cámara, el año 1917, la ley de ferroviarios, y en la convocatoria a sesiones extraordinarias de ese año el poder ejecutivo no incluyó en ella la ley respectiva, y en todo el año pasado no ha hecho gestión alguna en el senado para su sanción. Ha sido necesario que sobrevinieran todos estos problemas sociales, para que el poder ejecutivo se apercibiera de que es necesario ir a apresurar la sanción de la ley que la cámara de diputados había sancionado un año antes.

Había otra ley todavía, la inclusión de los jornales mínimos en el presupuesto que el poder ejecutivo no cumplió, como lo ha demostrado muy bien la diputación socialista: la jornada de ocho horas — que no ha incluido en las sesiones extraordinarias — el cierre de las casas de comercio a las 8 de la noche, que tampoco ha sido incluida en la convocatoria, y una ley, señor presidente, que era lo que le daba toda la eficacia a aquella comisión que se nombró por esta cámara para estudiar el abaratamiento de la

vida, que fué la ley contra los trusts, sancionada en esta cámara y que en el senado no se trató, siendo postergada a moción de un senador radical. Había, también, una ley que beneficia a todos los obreros del país, no ya a un gremio de la capital, que es la ley del pago del salario obrero, que tampoco fué incluida en la convocatoria y respecto a la cual yo me voy a permitir decir que ella es la que da la verdadera independencia económica al obrero. La ley de pago del salario obrero se discutió en la cámara en base a un estudio de la comisión de legislación, de acuerdo con los principios de proyectos presentados por los diputados Bas, Cafferata, Palacios, Dickmann y Bunge, y fué sancionada en el año 1917, estando ahora a la consideración del senado.

Se trata de una ley que garante a todos los obreros del país el cobro de su trabajo en la única moneda en que éste debe recibir la justa compensación a su labor; es la garantía de la integridad de su jornal, la garantía del término máximo para su abono y la del sitio donde se debe pagar, lejos de todo vicio, lejos de las pulperías, como sucede en una gran parte del país, y prohíba imponer penas en dinero efectivo. Justamente esto es lo que puede venir a aliviar a los tranviarios de una parte de ese cinco por ciento, impidiendo a las empresas que impongan penas en efectivo, como en la actualidad; y precisamente, para aliviarles de eso me voy a permitir presentar la siguiente minuta de comunicación: “La honorable cámara vería con agrado que el poder ejecutivo incluya entre los asuntos a tratar en las sesiones extraordinarias la ley sobre pago de salario obrero”.

Además, señor presidente, la cámara ha sancionado otras leyes que han tenido como finalidad mejorar las condiciones de vida de la masa trabajadora. Tenemos, por ejemplo, la que se refiere a la modificación a la tarifa de encomiendas postales, que el poder ejecutivo todavía no ha puesto en vigencia. Hemos formulado en la comisión de agricultura un proyecto de ley

orgánica sobre fomento a las cooperativas, y sabemos que la cooperación es el arma con que los obreros pueden defenderse contra todas las extorsiones de los acaparadores; pero ese proyecto, está en la orden del día de la cámara.

Yo quiero dejar constancia, pues, de que la cámara ha hecho labor, que tiene mucha más labor a realizar en sanción de leyes sociales, y que en toda esa labor de leyes obreras ha habido un ausente, que es el poder ejecutivo.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Suscribo casi totalmente los conceptos que acaba de expresar el señor diputado Pagés. Me es grato, con este motivo, dejar constancia de que es tal vez el diputado que vota más a menudo con la diputación socialista, y que la diputación socialista acompaña también a menudo al señor diputado en sus sensatas y progresistas iniciativas.

Pero deseo observar uno de los conceptos que ha expresado, cuando dijo que la cámara ha sancionado en 1917 un número grande de importantísimas leyes obreras "sin que los gremios hubieran llamado a sus puertas para pedir la respectiva sanción". Eso es exacto; pero, por mi parte, lo deploro profundamente! ¡Me felicito de que la cámara esté discutiendo hoy una ley obrera con la barra llena de obreros representantes de los gremios interesados! ¡Porque anhelo para mi país el día en que la clase obrera llame con creciente energía a las puertas del congreso, para exigirle que dicte las leyes que necesita para su mejoramiento! Y que llame con mayor energía aún a las puertas del senado, que retarda sistemáticamente la sanción de esas leyes, haciendo comprender resueltamente a sus miembros la absoluta necesidad de poner nuestra legislación social a la altura de los tiempos!

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!* — *Aplausos*).

Sr. Pagés. — Yo suscribiría las palabras del señor diputado con un simple agregado: "que sean extensivas a toda la república."

Sr. Bunge.— ¡Enteramente de acuerdo!

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y es aprobado el siguiente despacho:

Comisión de legislación

Honorable cámara:

La comisión de legislación ha estudiado el proyecto de ley presentado por el ex diputado Veyga sobre jubilación de empleados y obreros de empresas particulares; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etcétera.

Artículo 1.º — Créase la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios para el personal permanente de las empresas particulares de tranvías, teléfonos, gas y electricidad, constituida en virtud de autorizaciones del gobierno nacional y de la municipalidad de la capital federal, aun cuando éstas, por su naturaleza, se extiendan más allá del perímetro del municipio. (1.º del despacho).

Art. 2.º — Quedan comprendidos en los beneficios de la presente ley todos los empleados y obreros permanentes de las empresas a que se refiere el artículo anterior, y los de la Caja instituida por esta ley, como asimismo aquellos que hayan sido despedidos después del 25 de septiembre de 1918, salvo los condenados por delitos comunes.

Se consideran empleados u obreros permanentes a los efectos de esta ley, además de aquellos cuya ocupación tenga dicho carácter, a los que tuvieren más de seis meses de servicios continuos en una empresa. (2.º del despacho y agregado del senado a la ley de jubil. ferr.).

Art. 3.º — A los efectos de la presente ley, que sea reconocida la antigüedad de cada empleado y obrero desde el día en que empezó a prestar servicio.

A los que hayan trabajado en compañías actualmente fusionadas o que lleguen a refundirse, se les acuerda la antigüedad desde el día en que empezaron a prestar servicios en la primitiva empresa. (3.º del despacho).

(1) Art. 4.º — Los beneficios que acuerda esta ley son:

1.º Jubilación ordinaria.

(1) Los artículos 4.º al 18 inclusive sustituyen el artículo 4.º del primitivo despacho.

- 2.º Retiro voluntario.
- 3.º Pensión por invalidez.
- 4.º Subsídío de viudas y huérfanos. (16 ferrov. adapt. en la forma).

Art. 5.º — La jubilación ordinaria se acordará al empleado u obrero que habiendo prestado 30 años de servicios como mínimo haya cumplido la edad de 55 años, excepto que hubiera trabajado no menos de 20 años como telefonista, motorman, foguista, o con horario nocturno, o expuesto a la acción de sustancias tóxicas, en cuyos casos tendrá derecho al retiro ordinario desde la edad de 50 años, pero siempre con un total de 30 años de servicios como mínimo. (Sustituye al inciso 1.º del artículo 4.º del despacho. 18 ferrov. adaptado a las circ.).

Art. 6.º — El monto de la jubilación ordinaria se calculará con sujeción a la siguiente escala:

- 1.º Hasta cien pesos de sueldo, será igual al noventa y cinco por ciento del sueldo.
- 2.º Desde ciento un pesos hasta trescientos pesos de sueldo, será igual a noventa y cinco pesos más el setenta y cinco por ciento de la diferencia entre el sueldo y cien pesos.
- 3.º Desde trescientos un pesos hasta quinientos pesos de sueldo, será igual a doscientos cuarenta y cinco pesos, más el cuarenta y cinco por ciento de la diferencia entre el sueldo y trescientos pesos.
- 4.º Desde quinientos un pesos hasta setecientos pesos de sueldo, será igual a trescientos treinta y cinco pesos más el treinta por ciento de la diferencia entre el sueldo y quinientos pesos.
- 5.º Desde setecientos un pesos hasta mil pesos de sueldo, será igual a trescientos noventa y cinco pesos más el veinte por ciento de la diferencia entre el sueldo y setecientos pesos. (Art. 17 jubil. ferrov.).

Art. 7.º — El retiro voluntario se acordará al empleado u obrero que teniendo más de veinte años de servicios y hasta 5 años menos de la edad que da derecho a la jubilación ordinaria, no alcance al número de años de servicios exigido por el artículo quinto. Este retiro se calculará a razón del 2.5 por ciento de la jubilación ordinaria por cada año de servicios.

Después de 10 años de servicios se tendrá derecho a la devolución de los descuentos sufridos en el sueldo o jornal, más el 4 por ciento de interés, en caso de ser despedido por causas que no signifiquen delito ni falta punible con la exoneración según reglamentos aprobados por el poder ejecutivo, hasta tanto no se dicte una ley reglamentaria del trabajo aplicable a las empresas a que se refiere esta ley.

Las empleadas y obreras que por contraer matrimonio se vieran obligadas por

los reglamentos de las empresas a dejar su trabajo, percibirán como retiro el importe total de los descuentos con que hubieran contribuido al fondo de la caja, cuando no tengan derecho a mayor beneficio. (Sustituye al inciso 2.º, apartados a, b y d del artículo 4.º del primitivo despacho).

Art. 8.º — El monto de la pensión por invalidez se calculará a razón de un cinco por ciento del monto de la jubilación ordinaria por cada año de servicios hasta su máximo — Sustituye al inciso 2.º, apartado c), del artículo 4.º del despacho. 19 jubil. ferrov.).

Art. 9.º — Corresponde la pensión por invalidez, dentro de las condiciones establecidas en el artículo anterior, al empleado u obrero que después de diez años de servicios fuese declarado física o intelectualmente imposibilitado para continuar en el ejercicio de su empleo, o de otro compatible con su actividad habitual o su preparación comprobada. (Sustituye al inciso 2.º, apartado c), del artículo 4.º del despacho, y concuerda con el 20 jub. ferrov., primera parte).

Art. 10. — En ningún caso se podrá acordar retiro por invalidez a quien lo gestione después de seis meses de haber dejado de formar parte del personal de las empresas. (27 jub. ferrov.).

Art. 11. — Las pensiones por invalidez se acordarán con carácter provisorio, y los beneficios quedarán sujetos a las revisiones que, en número de dos anuales como máximo, imponga el directorio de la caja dentro de los 5 años posteriores a su otorgamiento, a partir de cuya fecha se considerarán definitivas. (28 ferroviaria).

Art. 12. — No se podrá acordar pensión por invalidez sin previo informe del Departamento Nacional de Higiene, o del médico o médicos designados al efecto por el directorio, respecto de las causales de imposibilidad física o intelectual alegadas. Sin perjuicio de esto, el directorio ordenará todas las averiguaciones que estime convenientes. (29 ferroviarios).

Art. 13. — Únicamente los que hayan obtenido jubilación ordinaria podrán volver al servicio. En este caso, el jubilado cesará en el goce de la jubilación y percibirá solamente el sueldo asignado al nuevo empleo. Abandonado éste, volverá al goce de la jubilación, sin que pueda interponer reclamo alguno para que le sea aumentada. (30 ferroviarios).

Art. 14. — Exceptúase de lo dispuesto en el artículo anterior al pensionado por invalidez cuyos servicios fuesen utilizados en otro empleo. En este caso percibirá, además del sueldo, la fracción de la pensión por invalidez que acuerde el directorio de la caja, proporcionalmente a la disminución sufrida en su capacidad de trabajo. Si alcanzase los años de servicios

para obtener la jubilación ordinaria, le será acordado retiro definitivo igual al monto del ordinario que corresponda al sueldo de su nuevo empleo, más la fracción de la pensión por invalidez que hubiere percibido. (31 ferroviarios).

Art. 15. — Las jubilaciones, pensiones y subsidios serán acordadas por el directorio de la caja, ante el cual deberán solicitarse; una vez concedidas, serán pagadas desde el día en que el interesado deje el servicio.

En caso de disconformidad del interesado, la resolución del directorio será apelada ante el juez civil en turno, quien, con las constancias del expediente administrativo u otros que, de oficio y para mejor proveer, solicite de las autoridades de la caja, resolverá, sin ulterior recurso, sobre la correcta o incorrecta aplicación de la ley. (32 ferroviarios, modificada la instancia).

Art. 16. — En caso de fallecimiento de un empleado u obrero jubilado o con derecho a jubilación, la viuda y los hijos menores, o a falta de éstos, los padres impedidos y los menores cuya subsistencia hubiera tenido a su cargo el causante, tendrán derecho a un subsidio pagadero en mensualidades, equivalente a la mitad del retiro correspondiente al causante, por el término de diez años.

El derecho a subsidio se extingue, para la viuda, en caso de contraer nuevas nupcias, para los menores varones al cumplir la edad de 18 años; para las hijas o alimentarios mujeres, al cumplir la mayor edad o contraer matrimonio. (Sustituye al inciso 3.º artículo 4.º del despacho. Concord. con el capítulo V. ferrov).

Si el fallecimiento ocurriera antes del término de la jubilación, pero después de haber prestado no menos de diez años de servicios, los beneficiarios mencionados tendrán derecho a una indemnización equivalente a la del segundo apartado del artículo 7.º.

Art. 17. — El monto de las jubilaciones, pensiones y subsidios se calculará sobre el promedio de los sueldos o jornales percibidos durante los últimos cinco años de servicios. (Inciso 7.º, art. 4.º del despacho).

Art. 18. — Las interrupciones en los servicios ocurridas antes de la promulgación de esta ley, que no hayan excedido de 5 años, causadas por renuncia del empleado u obrero, supresión del empleo por economía u otras causas que no afecten su honorabilidad, no perjudicarán los derechos que se le acuerdan, ni se considerarán como tales interrupciones las originadas por servicio militar obligatorio, enfermedad o fuerza mayor, debidamente justificada. En caso de motivos de salud o de supresión del puesto por razón de economía, tampoco quedarán perjudicados esos mismos derechos, cuando mediaran inte-

rumpciones de no más de 3 años posteriores a la promulgación de la presente ley.

Los servicios a computarse sólo comprenden a los empleados y obreros permanentes, sea cual fuere la forma en que perciban sus haberes, y prestados en cualquiera de las empresas a que se refiere el artículo 1.º de esta ley, no pudiendo computarse sino los de una sola empresa cuando al mismo tiempo el empleado u obrero prestara servicios en algunas de las otras.

En el cómputo final de los años de servicios, las fracciones de año se computarán como años enteros, si excedieran de 6 meses, y en caso contrario, no serán tomadas en consideración. (Incisos 4, 5 y 6 del artículo 4.º del despacho).

Art. 19. — El capital de la caja se formará desde la fecha de la promulgación de esta ley

- a) Con el importe del 5 % sobre los sueldos de todos los empleados y obreros permanentes de las empresas.
- b) Con el importe de dos meses de sueldo, pagaderos en 60 mensualidades, de cada empleado u obrero que cuente con más de 20 años de servicios; de un mes y medio de sueldo, pagadero en 45 mensualidades, de cada empleado u obrero que cuente de 10 a 20 años de servicios, y de un mes de sueldo, pagadero en 30 mensualidades, de cada empleado u obrero que cuente con menos de 10 años de servicios.
- c) Con el importe del primer mes de sueldo de cada empleado u obrero nuevo, el que se abonará en 30 mensualidades.
- d) Con la diferencia del primer mes de sueldo, cuando el empleado u obrero pase a ocupar un empleo mejor rentado o perciba un aumento de sueldo.
- e) Con una contribución mensual de las empresas, igual al 8 % de los sueldos y jornales de todos sus empleados y obreros de cualquier naturaleza, siempre que el sueldo no exceda de mil pesos mensuales, en cuyo caso la contribución se pagará solamente sobre esta última cantidad.
- f) Con el importe de las multas impuestas por las empresas al personal de empleados y obreros por inasistencia y medidas disciplinarias, de acuerdo con reglamentos aprobados por el Departamento Nacional del Trabajo, como asimismo con el de aquellas en que incurrieran las empresas, que no tengan otro destino por ley o por contrato.
- g) Con los intereses y beneficios procedentes de la colocación de los fondos de la caja.
- h) Con las donaciones y legados que

se le hagan. (Artículo 50. del primitivo despacho).

Art. 20. — Los fondos y las rentas que se obtengan de esta ley serán de exclusiva propiedad de las personas comprendidas en sus disposiciones, y con ellos se atenderá el pago de las jubilaciones, pensiones y subsidios que se acuerden en lo sucesivo, de conformidad a la misma.

En ningún caso podrá disponerse de ellos para otros fines, bajo la responsabilidad personal de los miembros del directorio, que se hará efectiva judicialmente en sus bienes, previa decisión del poder ejecutivo. (Artículo 11, ferrov.).

Art. 21. — Todos los fondos de la caja serán depositados en cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina, salvo las sumas que fije el directorio como indispensable para los pagos corrientes. (Art. 12 ferrov.).

Art. 22. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los fondos de la caja, descontadas las sumas indispensables para los pagos corrientes, serán invertidos, previa resolución del directorio, en cada caso, de manera que produzcan el mayor interés y la más frecuente capitalización, en títulos de renta nacional, o que tengan la garantía subsidiaria de la nación. (Artículo 13, ferrov.).

Hasta el 50 % de los fondos capitalizables podrá ser invertido en préstamos a los empleados u obreros comprendidos en esta ley, con garantía de primera hipoteca, y con destino exclusivo a la construcción de casas para habitación de sus propietarios, de un valor no superior a \$ 10.000. Estos préstamos gozarán de un interés no mayor del 7 % anual y se pagarán por amortizaciones acumulativas en un plazo que no exceda de 30 años, pudiendo ser combinados con un seguro ordinario de vida. (Nuevo).

Art. 23. — Las empresas a que se refiere la presente ley están obligadas a practicar los descuentos a que se refieren los incisos a), b), c) y d) del artículo 18 en los sueldos del personal de sus respectivas dependencias y a depositarlos mensualmente en dinero efectivo en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de la caja, dentro de los 30 días siguientes de cada mes vencido, sin deducir cantidad alguna por ningún concepto. (Art. 6.º del primitivo despacho).

Art. 24. — Las sumas con que deben contribuir las empresas de acuerdo con el inciso e) del artículo 18 de la presente ley, deberán ser depositadas en el tiempo y forma que para el depósito de los descuentos establece el artículo anterior. (Art. 7.º del primitivo despacho).

Art. 25. — Las empresas que no cumplieran con las disposiciones de los artículos precedentes, incurrirán en una multa de 500 pesos diarios después de la intimación que, al efecto de ese cumplimiento, debe haber-

les el presidente del directorio de la caja, quien tendrá personería para promover ante el poder ejecutivo, o los tribunales de justicia, las acciones ejecutivas pertinentes. (Art. 8.º del primitivo despacho).

Art. 26. — La administración de la caja estará a cargo de un directorio formado por tres representantes de las empresas y tres de los obreros y empleados de las mismas, y un presidente designado por el poder ejecutivo con acuerdo del senado. (Sustituye al artículo 9.º del primitivo despacho y concuerda con la ley de jubil. ferrov.).

Art. 27. — Para la elección de sus representantes, cada una de las empresas dispondrá de un número de votos proporcional al total de sueldos y salarios abonados en el año inmediato anterior.

Los representantes de los empleados y obreros serán designados con voto secreto por una asamblea de delegados, los cuales serán electos, sin intervención de las empresas, en comicios con votación secreta, por los empleados y obreros permanentes mayores de 18 años, a razón de un delegado por cada 500 empleados y obreros o fracción no menor de 250.

El poder ejecutivo reglamentará los trámites electorales y del escrutinio de acuerdo con estas bases, y presidirá la primera elección por intermedio del departamento nacional del trabajo y la inspección de justicia, estando la Dirección de las siguientes a cargo de la caja, con intervención de la inspección de justicia. (Sustituye al artículo 10 del primitivo despacho).

Art. 28. — El directorio nombrará y removerá a los empleados de la caja; dispondrá la percepción e inversión de sus fondos, fiscalizando a las empresas en lo pertinente; acordará las jubilaciones, retiros, subsidios y demás beneficios de la caja; decidirá sobre las reclamaciones de los beneficiarios; fijará un presupuesto de gastos que será satisfecho con fondos de la caja; dictará el reglamento general de ésta y levantará el padrón de empleados y obreros permanentes que tenga cada empresa, expresando el sueldo, categoría y años de servicios, a los fines de la presente ley. (11 del primitivo despacho).

Art. 29. — Cuando alguna de estas empresas pase a ser propiedad de la municipalidad, de acuerdo con las respectivas concesiones o por convenios ulteriores, sus empleados y obreros permanentes serán tratados en lo sucesivo como empleados municipales, conservando su antigüedad o jubilación. La caja en este caso transferirá al fondo municipal de jubilaciones, una suma proporcional al número de empleados y obreros permanentes en servicio y jubilados de las empresas respectivas. (12 del primitivo despacho).

Art. 30. — El monto de la jubilación, retiro, pensión o subsidio que se acuerda en virtud de esta ley no excederá de lo que corresponda a un sueldo máximo de

un mil pesos moneda nacional por mes, aunque el beneficiario goce de mayor retribución. En tal caso, no se sufrirá el descuento sino sobre el sueldo que sirve de base a la jubilación. (Art. 13 del primitivo despacho).

Art. 31. — Ninguno de los beneficios concedidos por esta ley se acordará a los empleados y obreros actualmente en condiciones de obtenerlos, sino después de haber transcurrido tres años de su promulgación. (Art. 14 del primitivo despacho).

Art. 32. — Las empresas están obligadas a suministrar al directorio de la caja los informes que solicite sobre su respectivo personal, cuyo número, retribuciones y sueldos que han de regir para cada año siguiente, deberán hacer saber al directorio antes del 1.º de octubre de cada año, pudiendo ser penadas con multas de 500 a 2000 pesos por el directorio de la caja, las empresas que no cumplieran con esta disposición. (Art. 15 del primitivo despacho).

Art. 33. — La caja formulará un censo de los empleados y obreros comprendidos en la presente ley, y un estudio matemático sobre las bases de la técnica actuarial, dentro de los tres primeros años de su funcionamiento, cuyo resultado se elevará al poder ejecutivo, proponiendo las modificaciones que creyere convenientes.

Art. 34. — Comuníquese al poder ejecutivo.

Sala de la comisión, marzo 13 de 1919.

Carios F. Melo. — Nicolás Avellaneda. — Rogelio Araya. — Benjamin Bonifacio. — Augusto Bunge. — Adrián C. Escobar. — Rafael Núñez.

Sr. Presidente (Goyeneche). — En consideración en particular.

Debo prevenir a los señores diputados que el despacho que se acaba de sancionar en general consta de 33 artículos...

Sr. Bunge. — Hago indicación de que artículo que no se observe se dé por aprobado; y también, como todos los señores diputados han podido leer el texto, de que se lea únicamente el número del artículo que se deba votar.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Haciendo asentimiento, así se hará.

Sr. Bunge. — Debo advertir a la honorable cámara que observaré el ar-

tículo 7.º, el inciso 9 del artículo 19, pero sin fundar la observación en este caso, y el artículo 29.

Sr. Presidente (Goyeneche). — La presidencia debe manifestar a los señores diputados que estando la cámara con número exacto, cualquier señor diputado que se ausente del recinto impedirá que se sancione hoy esta ley.

Por otra parte, debo hacer presente que, como la comisión de legislación ha modificado su primitivo despacho, corresponde a la cámara que autorice esa modificación; de tal suerte que si no se hace observación se votará el despacho con las modificaciones presentadas.

—Asentimiento.

Sr. del Barco. — ¿Se va a leer solamente el número de los artículos?

Sr. Presidente (Goyeneche). — Sí, señor diputado, de acuerdo con la indicación del señor diputado por la capital, que no ha sido contrariada por ningún señor diputado. Por eso no ha puesto a votación la presidencia la indicación de que sólo se lea el número de los artículos del despacho con las modificaciones introducidas posteriormente y aceptadas por la comisión.

Sr. del Barco. — Acepto.

— Se aprueban los artículos 1, 2, y 3.

—En discusión el 4.º

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Para explicar a los señores diputados que los nuevos artículos 4 a 18 son los principales introducidos en el despacho de la comisión, a moción del diputado que habla, en reemplazo del primitivo artículo 4.º y que la cámara puede aprobarlos con confianza, porque en su casi totalidad han sido tomados de la ley de jubilación de ferroviarios, mejorándolos al adaptarlos a la condición particular de los obreros tranviarios y demás que comprenderá esta ley, y a los cálculos actuariales a que me he referido.

—Se aprueba el artículo 4.º, como asimismo el 5.º

—En discusión el artículo 6.º

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Sobre la modificación que voy a proponer no insistí en el seno de la comisión, pero debo hacerlo ahora, rogando a la misma acepte, en el artículo que ahora se discute, una intercalación y un agregado.

Si este artículo se sanciona tal como está, hará imposible en absoluto la financiación de la caja. Dice que tendrá derecho a retiro voluntario cualquier empleado, haya contribuido o no con aportes a la caja y con cinco años menos de la edad que da derecho a la jubilación ordinaria, es decir, a los cuarenta y cinco en caso de ser telefonista, motorman, foguista u obrero de trabajo nocturno, por ser en estos casos el límite de edad de 50 años, como lo propuse a la comisión y ha sancionado la cámara, y a los cincuenta años en los otros casos.

Es materialmente imposible que esto pueda realizarse, como lo demuestran las tablas que tengo en mi poder y otros datos que pongo a la disposición de los señores diputados que desearan verificar mi afirmación. Es, pues, absolutamente inaceptable ese retiro, porque perjudica a los propios presuntos beneficiarios, dejando a su caja sin recursos.

Propongo que el retiro voluntario sólo se conceda, de acuerdo con las leyes homólogas del mundo entero, a los obreros que hayan contribuido efectivamente durante un mínimo de veinte años, y consistente en una tasa calculada de modo que ese retiro anticipado resulte automáticamente igual a la renta que corresponde a la reserva matemática que el asegurado ha acumulado con su contribución y con la de la empresa.

Por eso yo propongo que donde dice “teniendo más de veinte años de servicios” diga “habiendo contribuido efectivamente durante más de veinte años”. Para establecer este requisito de la contribución, y conseguir que el monto del retiro anticipado resulte igual a los fondos aportados, he estado trabajando hasta las tres de la ma-

ñana de hoy, y puedo afirmar a la honorable cámara que ello se consigue, en promedio de los diversos casos posibles, agregando al final las siguientes palabras: “deduciéndose un cinco por ciento de dicha jubilación ordinaria por cada año menos de la edad que da derecho a ella”.

Por ejemplo, un empleado u obrero que hubiera contribuido durante veinte años y que tuviera la edad de la jubilación, tendría derecho a un retiro voluntario del 50 por ciento de la jubilación ordinaria, sin reducción alguna; pero con cinco años menos de edad, su retiro voluntario le daría derecho sólo a la cuarta parte de la jubilación ordinaria, por el mayor costo que la más baja edad significa.

Entiendo que la mayoría de la comisión acepta la modificación que propongo, y puedo asegurarle que es la única manera de estabilizar las finanzas de la caja. En el caso de que no aceptara, pediría que se vote este artículo por partes, a fin de que la cámara tenga oportunidad de pronunciarse sobre la intercalación que propongo, y que recomendando muy seriamente a la consideración de los señores diputados.

Sr. Avellaneda (N. A.) — Pido la palabra.

La comisión acepta que se vote por partes.

No me alarman las observaciones del señor diputado, porque tengo presente que al final del despacho se ha agregado un artículo donde se establece que la caja que se va a crear por esta ley deberá designar una comisión para que haga un estudio actuarial, y que una vez efectuado ese trabajo, proponga al poder ejecutivo todas las enmiendas y modificaciones que considere convenientes, y entonces habrá llegado la oportunidad de introducir la enmienda que propone el señor diputado Bunge. Por otra parte, no me es posible consultar a todos los miembros de la comisión.

Sr. Bunge. — Advierto que la mayoría de la comisión acepta: el señor diputado Araya me ha dicho que acep-

ta, y creo que el señor diputado Bonifacio también.

En cuanto a lo que ha dicho el señor diputado Avellaneda, le hago notar que sería una falta de conciencia de la cámara el votar para los obreros esta promesa de un retiro voluntario sin hacer contribución alguna, cuando todo especialista en la materia advertirá que esa promesa no puede cumplirse. Por lo tanto, ella no debe votarse en la idea de que ha de ser retirada al entrar la ley en vigencia.

Sr. Arce. — Pido la palabra.

Voy a acompañar al señor diputado por la capital en virtud de extensos fundamentos que podrían ser dados, pero sobre todo por esta breve argumentación que voy a hacer: esto significa que inmediatamente de sancionada la ley todos los que quieran y tengan veinte años de servicios, aun cuando no hayan aportado un solo centavo, se retirarán tranquilamente...

Sr. Bunge. — Lo que significará a la larga un déficit de cien millones en el capital.

Sr. Arce. — ...lo que es una monstruosidad.

Sr. Avellaneda (N. A.) — Será una monstruosidad para el criterio del señor diputado. Pero yo no estoy autorizado para aceptar la enmienda, porque no puedo consultar a todos los miembros de la comisión.

Sr. Bunge. — La mayoría de la comisión acepta.

Sr. Avellaneda (N. A.) — Eso lo dice el señor diputado; pero a mí no me consta.

Sr. Bunge. — Y es en perjuicio de los verdaderos jubilados, es decir, del conjunto de los obreros.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

La proposición del señor diputado por la capital, doctor Bunge, de que se vote el artículo por partes, aceptada por el señor diputado por Buenos Aires, doctor Avellaneda, tiene para este señor miembro informante de la comisión este objeto: que la cámara advierta que se trata de una modificación propuesta por el señor diputado por la capital doctor Bunge en este momento y sobre estadísticas que ha-

cen lo para él, pero que la comisión no ha tenido a la vista.

Sr. Bunge. — Exactamente.

Sr. Melo. — De manera que el sentido de las palabras del señor diputado por Buenos Aires, doctor Avellaneda, no es el de oposición a la proposición del señor diputado Bunge, sino el de llamar la atención de la cámara sobre ella para que note al votarla que lo hace sobre la base de la estadística que el señor diputado por la capital doctor Bunge ha tenido en sus manos y sobre los cálculos que él ha hecho o revisado y que ha presentado bajo la fe de su autorizada palabra; y que la comisión no puede como tal opinar en un sentido favorable o desfavorable aconsejando a la cámara.

Dada la razón por la cual el señor diputado doctor Avellaneda ha opinado así, me parece que esta opinión resulta así muy digna de consideración por más que el señor diputado por Buenos Aires doctor Arce presente el caso como si fuera una enfermedad.

Alguno de nosotros podemos pensar que se debe votar lo que el señor diputado Bunge propone, pero puede ser que haya otros miembros de la comisión que no piensen así. Es una advertencia simplemente.

Sr. Agote. — El señor diputado por la capital interpreta muy bien el sentido de las palabras del señor diputado por Buenos Aires, pero no el de las palabras que yo he pronunciado.

Sr. Bunge. — Deseo que quede constancia en el Diario de Sesiones — y espero que los señores diputados tendrán la paciencia de escucharme — de algunos números que son absolutamente irrefutables...

Sr. Arce. — ¡Pero si no se necesita! Basta saber que en la ley de jubilaciones civiles, número 4349, existe la misma enfermedad. Se ha hecho la experiencia, todo el mundo lo sabe y, sin embargo, se sigue incurriendo en el mismo error de jubilar por un procedimiento matemático sin que haya aporte por parte del jubilado.

Eso es una enfermedad de sentido común y de fondo.

Sr. Melo. — Permítame el señor diputado: es una cuestión de criterio...

Sr. Arce. — No cabe duda: unos tienen un criterio muy grande y otros uno muy pequeño. (*Risas*).

Sr. Bunge. — Hago notar que de acuerdo con las estadísticas de la comisión, con más de treinta años de servicios, van a tener derecho a pensión al empezar a funcionar la caja unos 600 obreros en números redondos; y con más de quince años de servicios, — es decir que tendrán veinte dentro de cinco años — figuran en esa estadística 1865. Reducidos por la mortalidad propia de esas edades, si todos hicieran uso del retiro voluntario al cumplir los 20 ó 25 años de servicios, y suponiendo sólo retiros de 50 pesos mensuales, tendríamos 1.700 beneficiarios que nada o casi nada habrían contribuido. Esto representaría en total medio millón de pesos pagados a jubilados con treinta años de servicios, y más de un millón para los 1.700 prematuramente retirados: una carga de un millón y medio al año, la mitad de las entradas. Por consiguiente, quedarían reducidas, desde los cinco años, a la mitad las contribuciones capitalizables. A los diez años la carga por este concepto, con los nuevos llegados, sería de dos millones y cuarto o más por año; y al cabo de quince años serían tres millones, lo mismo que las entradas por contribuciones, y la caja tendría pronto que declararse en bancarrota. Pero en realidad ya estaría en bancarrota, desde el momento de sancionarse ese artículo, porque pueden hacerse todos los cálculos actuariales que lo demuestran, con mayor precisión que los que he presentado en resumen.

Sr. Rodríguez (A.) — Pido la palabra.

En vista de la disparidad de opiniones que existe entre los miembros de la comisión, y ante los informes del señor diputado Bunge y los cálculos que ha presentado respecto a la posible bancarrota de la caja, y siendo de verdadero interés el no dar un voto así nomás, inconscientemente, pediría que este asunto vuelva a comisión hasta mañana...

Sr. Avellaneda (N. A.) — No hay tal disparidad de opiniones.

Sr. Rodríguez (A.) — ...y de esta manera podríamos tener la tranquilidad de conocer la opinión de la comisión.

Sr. Avellaneda (N. A.) — No hay dos opiniones en la comisión, señor diputado. El señor diputado Bunge hace sus indicaciones como diputado, no como miembro de la comisión. La comisión ha dicho que no tiene en este asunto opinión.

Sr. Rodríguez (A.) — Eso es lo que quiero: que tenga opinión.

Sr. Avellaneda (N. A.) — Se trata de una nueva iniciativa, que se formula en este momento. Pero en vista de este debate, ya tiene opinión formada la comisión.

Sr. Bunge. — Se han dado todas las cifras esenciales, y ya tiene opinión la comisión.

Sr. del Barco. — Pido la palabra.

Tan es exacto lo que decía el señor diputado Arce, respecto a lo que ocurrió con la caja de jubilaciones y pensiones civiles, con estas jubilaciones acordadas inmediatamente de dictada la ley, sin haberse previsto nada sobre los aportes respectivos, que en el presupuesto actual la comisión ha proyectado un artículo que dice: "La caja nacional de pensiones y jubilaciones civiles formulará cargo a los empleados, jubilados y pensionistas, por el importe del 5 por ciento de los sueldos no descontados en cualquier época de la prestación de servicios. Dicho cargo será amortizado con el descuento mensual del 3 por ciento del haber correspondiente".

Esta situación ha sido una de las causas de la ruina de la caja. Y si vamos a iniciar esta caja de jubilaciones y pensiones de tranviarios en las mismas condiciones, caerá ella también en bancarrota.

Me basta esta sola consideración para votar la indicación del señor diputado Bunge, que no necesita, a mi juicio, demostración matemática de ninguna clase.

Sr. Avellaneda (N. A.) — Por mi parte, también acepto.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Lo único que está en discusión en este momento es la moción del señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Rodríguez (A.). — Habiéndose puesto de acuerdo los miembros de la comisión, la retiro.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Deseo hacer una rectificación de las palabras pronunciadas por el señor diputado por Córdoba. El estado actual de la caja nacional de jubilaciones y pensiones de empleados civiles viene de las leyes posteriores a la primitiva...

Sr. del Barco. — Y de esto de las jubilaciones sin aportes también.

Sr. Melo. — ...que fueron leyes de privilegio que han traído la bancarrota de la caja.

La ley primitiva sería una ley defectuosa, pero no era una ley de privilegio como las posteriores; éstas por medio de prescripciones que no existen en ninguna caja de seguros de ningún país civilizado como la relativa al promedio de los sueldos o a la abolición del límite de edad quebrantaron totalmente la estabilidad de la caja—no la causa que da el señor diputado.

En realidad, hay aquí dos cuestiones: una, la de la estabilidad de la caja, a que se ha referido el señor diputado Bunge, respecto de la cual ya dije antes que era necesario tener presente los elementos de juicio que el señor diputado Bunge había de presentar, y que ya ha presentado; la otra, es el criterio con el cual se consideran estas cajas en cuanto a los aportes que han de formarlas. Hay quienes piensan que el único que debe contribuir para ellas es el estado; otros creen que deben ser los empleadores; otros que los empleadores y los empleados; otros que los empleadores, los empleados y el estado. Por eso decía que ésta es una cuestión de criterio y con esto queda demostrado.

Debo agregar, señor presidente, que si los miembros de la comisión no pudieran reunirse como no han podido hacerlo hasta este momento, votarán individualmente; yo, por mi parte, vo-

taré la proposición del señor diputado Bunge.

Sr. Bunge. — La mayoría de la comisión la ha aceptado.

Sr. del Barco. — Pido la palabra para una breve rectificación.

Estoy de acuerdo con el señor diputado Melo. No he dicho que sea la única causa, sino una de las causas. Y tan estoy de acuerdo, que he proyectado el año pasado la modificación de la ley de jubilaciones y pensiones, derogando todas las leyes que la desnaturalizan.

—Después de un momento de espera para formar quórum:

Sr. Fernández. — ¿Hay quórum en la casa?

Sr. Presidente (Goyeneche). — Sí, señor diputado. Se está invitando a los señores diputados que se encuentran en antecala.

Sr. Fernández. — Se podría nombrar a una comisión de diputados para que se invite a estos señores a que vengan a formar quórum...

—Entran varios señores diputados.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Hay número en el recinto.

Se va a votar por partes, de acuerdo con la indicación formulada.

Sr. Bunge. — La comisión la acepta ahora, de manera que queda incorporada al despacho.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a leer en la forma en que quedaría con las modificaciones propuestas por el señor diputado por la capital y aceptada por la comisión.

—Se lee:

"El retiro voluntario se acordará al empleado u obrero que habiendo contribuido efectivamente durante más de 20 años, y hasta con cinco años menos de la edad que da derecho a la jubilación ordinaria, lo alcance al número de años exigidos por el artículo 5.º. Este retiro se calculará a razón de 2.5 por ciento de la jubilación ordinaria por cada año de servicios, deduciendo el 5 o/o de dicha jubilación ordinaria por cada año menos de la edad que da derecho a ella".

Sr. Presidente (Goyeneche). — Si no se observa se dará por aprobado el artículo en esta forma.

—Se da por aprobado.

—En discusión el artículo 8.º

Sr. Secretario (Zambrano). — En este artículo hay un error de imprenta, según lo ha manifestado el señor diputado Bunge a la secretaría.

Dice: “El monto de la pensión por invalidez se calculará a razón de uno por ciento”; debe decir “de cinco por ciento”.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Con la salvedad indicada, si no hay observación se dará por aprobado.

—Se aprueba.

—Sin observación se aprueban igualmente los artículos 9 a 18, inclusive.

—En discusión el artículo 19.

Sr. Bunge. — Pido que se vote el inciso f, porque la diputación socialista no acepta el principio de las multas, por las razones que ha dado el señor diputado Pagés, que son las mismas que ha tenido siempre la diputación socialista en contra de las multas.

Sr. Presidente (Goyeneche). — No habiendo sido observados ninguno de los otros incisos de este artículo, se dan por aprobados, y se va a votar el inciso f del despacho de la comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Pagés. — Yo pregunto: ¿cómo quedaría este artículo si se sanciona la ley, que ya tiene el voto de la cámara, sobre pago de salario obrero?

Sr. Bunge. — Quedaría derogado en la parte que es incompatible.

Sr. Pagés. — Veo que la cámara ha rectificado su voto anterior. Yo soy lógico con lo que voté al tratarse la ley de pago de salario obrero en contra de las multas en dinero.

Sr. Melo. — No es incompatible totalmente; de modo que no hay propiamente una rectificación al voto anterior.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Permítanme los señores diputados. No hay nada en discusión.

—Sin observación se dan por aprobados los artículos 20 a 28, inclusive.

—En discusión el artículo 29.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Observo este artículo, e invito a la comisión a retirarlo, y en caso contrario, a la cámara a votar en contra. En su primera parte, es redundante. Dice en ella que cuando algunas de estas empresas de servicios públicos pasen a ser de propiedad de la municipalidad, sus respectivos empleados serán empleados municipales. Eso es tan verdad como aquello de que a la mano cerrada llaman puño. (*Risas*).

Y la segunda parte me parece una mala disposición, porque incorporaría a la caja municipal de pensiones a esos empleados de empresas de servicios públicos. La caja municipal está organizada sobre bases muy diferentes, de patronato, sin representación de sus empleados, mientras que ésta la tiene. Además, las bases económicas de esta caja son mucho más sólidas que las de la caja municipal.

Sr. Molina. — Pido la palabra.

Yo creo que no convendría la supresión del artículo, si no se agregara otro, en su reemplazo, que dijera más o menos lo siguiente: “Que en caso de que esas empresas pasen a la municipalidad, el régimen de esta caja especial continuará siendo el mismo que prescribe esta ley”.

Sr. Bunge. — Lo apoyo, por mi parte, con entusiasmo, porque coincide con lo que propuse en el seno de la comisión. Se pondría como agregado a las tres primeras líneas. Quedaría el texto del artículo en esta forma: “Cuando alguna de estas empresas pase a ser propiedad de la municipalidad o del estado, de acuerdo con las respectivas concesiones o por convenios ulteriores, el régimen de esta caja quedará subsistente para sus respectivos empleados y obreros”.

Sr. Garat. — Pero entonces se encontrarán en una situación de privi-

legio con respecto a los demás empleados municipales.

Sr. Araya. — La modificación que propone el señor diputado Bunge, ya había sido tratada el día de ayer en la comisión, la cual se manifestó de acuerdo en aceptarla.

En realidad, señor presidente, si las empresas de tranvías, u otros servicios públicos, pasan a manos de la municipalidad, o del estado tendrían que ingresar, de acuerdo con el artículo, los fondos a la caja de jubilaciones y pensiones municipales, que representa una menor garantía, con relación a los fondos, que esta caja tiene. Y, por otra parte, estableceríamos un sistema que sería menos liberal para los obreros que el que establece el mismo artículo, porque la comisión que maneja la caja de jubilaciones y pensiones está compuesta por obreros y representantes de las empresas: tres representantes de las empresas, tres de los obreros y uno nombrado por el ejecutivo...

Sr. Garat. — Muy conforme. Votaré la modificación.

Sr. Araya. — ...y si pasara a la municipalidad, los obreros no tendrían ninguna representación en esa caja de jubilaciones y pensiones.

Es por eso que la comisión acepta la modificación propuesta por el señor diputado Bunge, en la forma que acaba de hacerla conocer a secretaría.

Sr. Bunge. — Y de acuerdo con la indicación del señor diputado Molina.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Es un artículo nuevo en substitución del contenido en el despacho de la comisión.

Sr. Melo. — Ese fué el pensamiento de la comisión.

Sr. Bunge. — Exactamente.

Sr. Rodríguez (A.). — Pido la palabra.

Quisiera una aclaración del señor miembro informante de la comisión respecto al artículo 26 que se ha votado ya: si el directorio tendrá sueldo.

Sr. Bunge. — Eso se deja librado a la reglamentación de la ley, pero evidentemente no deben tener sueldo, en mi entender, sino el presidente y los funcionarios permanentes. Los vocales del directorio, en todas las institucio-

nes económicas de esta clase, no deben recibir sino indemnización por el tiempo perdido, en su trabajo como vocales del directorio.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Permítame el señor diputado.

La presidencia entiende que no está en discusión ese artículo. Una vez terminada la discusión, pedirá el señor diputado su consideración.

Sr. Melo. — Es bueno aclarar, porque es una cosa fundamental. Me parece muy útil la observación del señor diputado Rodríguez y conviene decir dos palabras, con motivo de ella.

Se pensó precisamente, y se conversó en la comisión, respecto de la remuneración de los servicios de los representantes de los obreros y de las empresas, lo mismo que del presidente designado por el poder ejecutivo con acuerdo del senado; y entonces me parece que fué el señor diputado Bunge quien observó, — y en eso hemos estado de acuerdo todos — que si esos cargos fueran remunerados, tratarían aquellos que los desempeñaran de convertirlos en permanentes...

Sr. Bunge. — Exactamente.

Sr. Melo. — ...cuando el pensamiento es que sean una delegación a término, un servicio que presten los delegados de los obreros y los de los patronos a su gremio y a sí mismos, pues están interesados en la marcha de la caja como obreros y como patronos. Ahora, en cuanto al funcionario designado por el poder ejecutivo, con acuerdo del senado, se pensó, efectivamente, que debía tener remuneración.

Sr. Rodríguez (A.). — Pido la palabra.

Veo que mi pedido de aclaración es realmente lógico, pues parece que el informe de la comisión había pasado por encima de este punto.

Es, pues, perfectamente justo que se aclare, porque luego vendrán las interpretaciones y en la aplicación de la ley habrá que recurrir a dilucidar cuál ha sido el criterio en la cámara sobre esto y resultará que el señor miembro informante no ha dicho una sola palabra al respecto. Por las que ha pronunciado el señor diputado

Melo, veo que el punto ha sido tratado en el seno de la comisión...

Sr. Avellaneda (N. A.). — El miembro informante de la comisión no ha dicho una sola palabra al respecto porque el artículo no fué observado, y como se estableció que artículo que no fuera observado se daría por aprobado, mal podía hacer la aclaración.

Sr. Beiró. — Pido la palabra.

Respecto a la observación del señor diputado Rodríguez, debo hacer presente que, efectivamente, el despacho primitivo establecía la remuneración en el caso. Su supresión fué una de las modificaciones que propuse a la comisión y que ésta aceptó, entre otras que dí, por los conceptos que expuso el señor diputado Bunge.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a proceder a la lectura del artículo 29 en la forma propuesta por el señor diputado por la capital.

Sr. Bunge. — Nunca ha habido sueldo en el proyecto de la comisión.

—Se lee:

“Artículo 29. — Cuando alguna de esas empresas pase a ser propiedad del estado o de la municipalidad, de acuerdo con las respectivas concesiones o por convenios ulteriores, el régimen de esta caja quedará subsistente para sus respectivos empleados y obreros”.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a votar el artículo 29 en la forma leída e incorporada al despacho.

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Goyeneche). — En discusión el artículo 30.

Sr. Rodríguez (A.). — Pido la palabra.

En la redacción de este artículo hay algo que podría ser inconveniente para los mismos que gozan de esta jubilación.

El artículo expresa que en la caja no habrá jubilación que exceda de la que corresponda a un sueldo de mil pesos, aunque el beneficiario goce de mayor retribución...

Sr. Bunge. — Es evidente: desde que las empresas y los obreros no contribuyen sino hasta un sueldo de mil pesos como máximo.

Sr. Rodríguez (A.). — Permítame el señor diputado; voy a exponer las razones que tengo para hacer mi observación.

Yo creo que esto puede ser un obstáculo para que algunos empleados que están dentro de las condiciones de la jubilación, se retiren, porque el exceso que tiene de sueldo los retendrían y entonces privarían del ascenso a los que vienen detrás.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Para decirle al señor diputado que no sucederá lo que él afirma.

El artículo 6.º establece claramente la escala según la cual se acordará la jubilación de acuerdo con el sueldo; luego, el artículo pertinente a la contribución de las empresas y de los empleados, artículo 19, establece que ningún empleado contribuirá por lo que de su sueldo exceda de 1000 pesos: sólo contribuirá hasta la suma de mil pesos, y lo mismo se dice con respecto de las empresas. De manera que para los sueldos mayores de mil pesos, hay un seguro contraído sólo hasta dicha suma.

Por otra parte, las empresas no tienen el menor interés en no aumentar el sueldo por esa razón, porque ello no les ha de costar, en cuanto a la jubilación se refiere, una contribución mayor. La contribución es la misma tanto para las empresas como para el empleado.

Sr. Avellaneda (N. A.). — Por otra parte, no se trata de una innovación de este despacho. Es un artículo que ya existe en la ley de jubilaciones ferroviarias.

Sr. Rodríguez (A.). — Pero mi argumento queda en pie.

Sr. Bunge. — Ese empleado, con un sueldo de más de mil pesos, está en condiciones de contratar cualquier seguro en una empresa privada por el excedente, y no existe razón para que el estado obligue a las empresas y a los empleados a que contraigan un seguro que no les hace falta.

Es un principio de razón social no instituir un seguro obligatorio sino de lo necesario, y con sueldos superiores a 1.000 pesos están bien garantidos los empleados; tienen para el puchero.

Sr. Presidente (Goyeneche). — ¿El señor diputado por la provincia de Buenos Aires hace alguna observación al artículo?

Sr. Rodríguez (A). — No, señor presidente; pero después de las explicaciones dadas, quedo en las mismas. *(Risas)*.

Sr. Melo. — Por otra parte todas las cajas de seguros tienen una limitación respecto a la cantidad.

—Se aprueban sin modificación los artículos 31 a 33, inclusive.

—El artículo 34 es de forma.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Queda sancionado el proyecto.

6

PREGUNTAS

Sr. Ferreyra. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Permítame el señor diputado.

Voy a contestar a una pregunta que al comenzar la sesión hizo a la presidencia el señor diputado Dickmann.

La presidencia, al decir que el poder ejecutivo había incluido en las sesiones extraordinarias algunos asuntos, se refería a la ley de patronato de menores, al reconocimiento, estímulo y responsabilidad de las sociedades obreras, cuya inclusión había sido solicitada por la cámara a pedido de los señores diputados por la capital doctores Retto y Melo.

En cuanto a la inclusión solicitada por el señor diputado Dickmann respecto al cierre de las casas de comercio y jornada de ocho horas, la presidencia no ha recibido ninguna comunicación al respecto.

Sr. Bravo. — ¿El poder ejecutivo ha contestado, señor presidente, la minuta de comunicación pidiendo informes sobre el número de muertos, heridos y presos habidos durante los sucesos del mes de enero?

Sr. Presidente (Goyeneche). — No, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por la capital.

7

ENTRADA DE UN DESPACHO

DE COMISION

Sr. Ferreyra. — Para solicitar a la honorable cámara que autorice a la mesa a dar entrada al despacho de la comisión de presupuesto en el proyecto de ley venido en revisión del honorable senado sobre aumento de sueldos a agentes de policía, bomberos y empleados del correo.

Sr. Arce. — ¿Qué corresponde tratar ahora, señor presidente?

Sr. Presidente (Goyeneche). — El presupuesto, señor diputado. El señor ministro de hacienda ha comunicado que se ponía en camino hacia el congreso.

Sr. Arce. — Voy a ampliar la moción del señor diputado por la capital en el sentido de que después de que se trate ese asunto...

Sr. Presidente (Goyeneche). — El señor diputado por la capital no ha hecho esa indicación. Ha pedido simplemente que la cámara autorice a que se le dé entrada al proyecto en revisión.

Sr. Arce. — Entonces hago indicación para que la cámara entre a tratar el presupuesto y no se interrumpa su consideración hasta terminarlo.

—Apoyado.

Sr. Ferreyra. — ¿Se ha autorizado a dar entrada al asunto que me he referido?

Sr. Presidente (Goyeneche). — Hay asentimiento general, de manera que se le dará entrada.

—Se lee:

Despacho de comisión

PRESUPUESTO:

—En el proyecto de ley venido en revisión del honorable senado que aumenta el sueldo de los escribientes, personal de tropa y agentes de investigaciones de la policía y cuerpo de bomberos de la capital, jefes de oficinas mixtas y auxiliares de la 14.ª y 15.ª categoría de correos y telégrafos. *(A la orden del día)*.